

## CRONICA DEL MES

Febrero, marzo y abril

La atención nacional, durante *el mes de febrero*, se concentró en las elecciones, como queriendo olvidar por un tiempo los graves problemas que están al fondo de la crisis salvadoreña; aunque el mismo resquicio abierto por la contienda electoral deja aflorar otro tipo de conflictos, principalmente económicos y laborales.

La asamblea legislativa al fin logró aprobar la Ley Electoral Transitoria, que tiene sus incoherencias con la misma Constitución recién aprobada, pero que llenará los objetivos que se han trazado para el evento electoral. Sin embargo, el Consejo Central de Elecciones, además de haber quedado un tanto al margen de la convocatoria a elecciones y a la elaboración de la Ley, se manifestó restringido en su capacidad económica y técnica para tener listos todos los requisitos del sufragio; a las más de 300.000 cédulas repetidas agregó más de medio millón de salvadoreños que no podrán emitir su voto por estar desplazados y/o indocumentados en el interior o en el exterior del país, lo que dejó un máximo posible de poco más de millón y medio de votantes. Sin embargo, "algo huele a podrido en Dinamarca:" el miembro propietario por ARENA, Dr. Rafael Hasbún, hacia tiempo que había renunciado al CCE denunciando ciertas anomalías; a finales de febrero renunció también el suplente del mismo partido, Dr. Posada, denunciando diez tipos de posibles fraudes; paralelo a todo esto, un partido tras otro fueron reconociendo públicamente el clamoroso fraude en las elecciones de 1982. ARENA impugnó la inscripción del candidato a vicepresidente del PDC, Dr. Alvergue, y tras discusiones y presiones de todo tipo, el CCE decidió

invalidarlo, por lo tanto fue sustituido por el Lic. Castillo Claramont, quien montó todo un espectáculo de despedida y agradecimiento en el seno de la asamblea, capitalizando simpatías. Se intensificaron los rumores de coaliciones de partidos, pero a finales del mes cada uno inscribió independientemente a sus candidatos, inclusive los partidos MERECE y POP, y se sortearon los lugares que cada emblema ocuparía en las papeletas de votación. Mientras tanto, rutinariamente se prorrogó otro mes el estado de sitio, sin tomar en cuenta que limitaba las condiciones requeridas para un proceso eleccionario.

Los diversos partidos se entregaron a una campaña frenética, en la cual se polarizaron cada vez más las posiciones entre ARENA y PDC, con acusaciones de toda índole y recurso a ardides poco democráticos. ARENA y el PCN crearon sus respectivos frentes socio-políticos, para compensar en parte el "pacto social" establecido entre el PDC y la UPD, que traería como consecuencia el retiro del PUCA de esta organización, por haber quebrantado el principio de apoliticidad. El POP se pronunció valientemente sobre las elecciones y la situación del país, dando pie a especulaciones de ser un filial del PDC. La UPD acusó a la F.A. de quebrantar su apoliticidad, apoyando a candidatos de ARENA y del PCN, lo cual provocó declaraciones oficiales del más alto nivel castrense desmintiendo y ratificando su imparcialidad y garantía del libre sufragio. Los diversos candidatos y personeros de partidos, por su parte, acudieron a Washington, no se sabe si a recibir consignas, a rendir pleitesía, o a obtener cualquier tipo de apoyo; sin embargo, el gobierno de ese país volvió a negar visado a

D'Aubuisson, basado en la sospecha de alguna complicidad con los escuadrones de la muerte.

La campaña siguió su curso, prescindiendo por completo de los verdaderos problemas, como si el país estuviera en tiempos normales, como si no hubiera guerra y caos, crisis y terror. Se denunció que ARENA amenazó al diputado Hugo Carrillo (PCN); fue asesinado el diputado Ayala (PAISA) por desconocidos y todo el conflicto se centró en quién lo sustituirá en la asamblea y si el puesto no correspondía propiamente al PCN; Duarte, en un almuerzo con los integrantes de ABECAFE, mostró su verdadero programa, sin reformas, con pleno respaldo y apoyo a la empresa privada, sin diferencia mayor con cualquier otro partido, al menos en sus promesas. Finalmente, el Secretario de Estado, Shultz, en su visita a El Salvador, afirmó que su gobierno mantendrá neutralidad en las próximas elecciones, alabó los progresos logrados por el régimen, aunque lamentó el deterioro permanente de los derechos humanos, especialmente por causa de la guerrilla y de los escuadrones de la muerte. En esta polarización poco impacto tuvo la Carta Pastoral de los obispos salvadoreños sobre la paz en el país, a la cual la mayoría de los medios de comunicación ni le prestaron atención; como tampoco a las "desinformaciones" del COPREFA respecto al ataque de la guerrilla en Atioco-yo, a la cual inculpó de haber asesinado a los soldados a sangre fría; Mons. Rivera desmintió tal información, quejándose de que no se hubiera rectificado la noticia, como lo hizo la UPI en un segundo cable internacional que no se publicó aquí.

Frente a la vorágine de la campaña electoral, el comité político-diplomático del FDR-FMLN hizo pública a comienzos del mes una nueva propuesta de paz, diálogo y negociación, propugnando un amplio gobierno de participación, con carácter transitorio, para proceder a conversaciones de paz y reconstruir el país; únicamente quedarían excluidas las fuerzas más extremistas y reaccionarias, así como los responsables inmediatos de la violencia y la represión, autodepurada la institución armada. Tal propuesta no fue tomada en serio ni en consideración, fuera de alguna alusión despectiva, principalmente de parte de las fuerzas de derecha. Fueron escasas las voces a favor de que se tomara en consideración por bien del país, tanto más cuanto que Estados Unidos tampoco la tomó en serio; únicamente el candidato de AD, Dr. Fortín Magaña, envió una

carta al presidente del FDR, Dr. Ungo, en la cual ofrecía una discusión pública donde él indicara, para analizar la problemática nacional y las posibles soluciones; gesto más bien romántico, si no propagandístico, dado el escaso poder político y social que ese partido representa.

Aprovechando el estrecho margen de apertura propiciado por la campaña electoral, así como la derogación del decreto 544, se desató en el país una ola de paros laborales, ya fuera en bancos (BCR y otros), ya fuera en instituciones del Estado o autónomas (IRA, ANDA, ISSS, ISTU), e incluso en algunas empresas privadas, demandando aumentos considerables de salarios, congelados desde 1982. El gobierno se apresuró a hacer aprobar un aumento de hasta el 10 por ciento, al tiempo que de una u otra forma amenazaba con militarizar las instituciones; por su parte, las fuerzas más derechistas atribuyeron los hechos a una consecuencia del pacto UPD-PDC y a infiltración comunista, como acción contra ARENA, cuyos personeros dirigen o controlan tales instituciones. La realidad, sin embargo, indica que, si bien ése puede ser un motivo, la crisis económica va estrangulando progresivamente la vida de las mayorías populares. Las cosechas son año tras año menores, la corrupción en muchas instituciones pertinentes se hace pública cada día más, el aceite escasea y se encarece porque los productores exigen precios más altos, las tarifas eléctricas han aumentado en un 48 por ciento este año, en educación no se han pagado los sueldos a los maestros del interior del país ya que su presupuesto se ha visto recortado primero por necesidades de guerra y después para abonar la "deuda política," los cafetaleros y algodoneros presionaron insistentemente para obtener mayores ventajas financieras, SCIS y FENAPES protestaron por los embargos y la política financiera que no les concedía sus deseos; pero Estados Unidos donó 27.000 Tm. de maíz y el Programa Mundial de Alimentos más de 360 Tm. de sardinas, alimento extraño a la dieta popular y que a los más puede ser útil en la cuaresma que ya ha comenzado.

La guerra, el problema fundamental de El Salvador, tuvo bajo relieve durante el mes de febrero. Sin embargo, la F.A. realizó distintos operativos para impedir acciones del FMLN, en Chalatenango, Usulután o San Miguel; todos ellos de mediana importancia. Dijo haber causado más de 60 muertos a la guerrilla y destruido 11 campamentos; en San Miguel, por otro lado, fue

creado un nuevo batallón, el "Ponce." A las insistentes presiones contra los escuadrones de la muerte, el FBI ofreció su colaboración para encontrarlos, pero el director de la Policía de Hacienda hizo declaraciones de que en ese cuerpo no existen tales grupos. A pesar de todo, durante el mes se ha comprobado el asesinato de 269 civiles (58 por escuadrones, 195 por el ejército, 14 por tropas hondureñas, 1 por la defensa civil, y otro por la Policía Nacional), frente a 15 a manos del FMLN; también fueron capturadas 65 personas (17 en sus casas y 4 en el trabajo) de las que 30 se dieron por desaparecidas y el resto se encuentran en cárceles o cuarteles. El FMLN capturó a 5 jornaleros.

La guerrilla realizó en febrero un mínimo de 261 acciones (38 en el departamento de San Miguel, 36 en el de Usulután, 33 en el de San Vicente, 29 en el de Chalatenango, 23 en el de San Salvador; sólo en Sonsonate y Ahuachapán no se detectaron acciones); de ellas, 18 fueron tomas, 118 estrictamente militares, el resto de diverso tipo, entre ellas la captura de 54 miembros uniformados; causó al ejército 77 muertos (2 tenientes, 9 subtenientes, 6 sargentos, 7 subsargentos, 8 cabos y 42 elementos de tropa), pero que si se agregan los cuerpos de seguridad y los paramilitares, arrojan un total de 134 muertos, 65 heridos, 107 bajas, para una suma de 306 "bajas." Al mismo tiempo, recuperaron 98 armas largas, 8 cortas, 8 de apoyo, 7 radios, 7.700 cartuchos, 90 proyectiles pesados y destruyeron dos helicópteros. El FMLN realizó algunas acciones más, destacadas y llamativas, como el ataque y destrucción de la guarnición de Atiocoyo (Opico, La Libertad), el de Masahuat (Santa Ana), el ataque a un convoy ferroviario en las proximidades de Aguilares (San Salvador), los sucesivos ataques a la zona de Tecoluca (San Vicente) para desarticular el plan CONARA, y la toma de importantes poblaciones en Usulután, precisamente donde se está implementando la operación "paz y bienestar para Usulután." Por su cuenta y riesgo, el grupo disidente MOR estalló bombas en varias gasolineras de la capital y se atribuyó (o dicen que se atribuyó) algunos asesinatos y otras acciones irrelevantes.

En el campo internacional la tendencia se mantiene inalterada. Todavía resuenan algunas reacciones al "informe Kissinger," del cual disienten México y Colombia, pero Costa Rica le da cierto respaldo en la espera de la ayuda. Tal vez la campanada haya sido la renuncia del embaja-

dor especial para Centroamérica, Stone, por diferencias en la política hacia la región y porque se tomaban decisiones sin consultarle; pronto fue sustituido por Schlaudeman, quien probablemente sea menos "independiente." Si bien los candidatos demócratas unánimemente se oponen a la política de Reagan para la región, y de modo especial Jesse Jackson, la administración solicitó fondos para un incremento desmesurado en la ayuda militar y económica para el área, y especialmente para El Salvador y los antisandinistas, a pesar de las denuncias de corrupción y derivación de armas al FMLN. Al mismo tiempo, Honduras se plegó totalmente a los deseos del Pentágono, permitiendo bases permanentes en su país, preparando —o dando toda clase de facilidades— a las nuevas operaciones conjuntas, esta vez cerca de las fronteras guatemalteca y salvadoreña con la esperanza de colaboración de los ejércitos de estos países y de Panamá.

Nicaragua, mientras tanto, sufrió el embate de las ofensivas contrarrevolucionarias apoyadas por la CIA, incluidos los sabotajes y ataques y minados de puertos; de nada sirvieron las nuevas ofertas de paz, la promesa formal de elecciones y amnistía, o el recorte al apoyo que brinda en su territorio a la dirigencia del FDR-FMLN. En cambio, Guatemala recibió de Estados Unidos repuestos de helicópteros y otro tipo de suministros militares, aun en contra de las protestas por la violación sistemática y continua de los derechos humanos, e incluso la amenaza del presidente de turno de convertirse en dictador si los partidos no aceptaban sus condiciones.

Claramente se evidencia, una vez más, quién decide, y cuál es la verdadera política norteamericana, al desnudo: elecciones en El Salvador, aunque no sirvan para nada, no se den las condiciones indispensables ni estén listos los mecanismos apropiados; militarización progresiva de Honduras, a costa de su soberanía y dignidad nacionales; oposición inquebrantable, armada y cínica al sandinismo, por más que modere sus actitudes, ceda a presiones "democratizadoras" o muestre la mejor voluntad; apoyo progresivo a Guatemala, no importando su ilegalidad e inconstitucionalidad o su barbarie en derechos humanos. La peor de las plagas apocalípticas se va expandiendo inexorablemente sobre la región, por haber tenido la osadía, en algunos de sus grupos, de desafiar los intereses norteamericanos y levantar su cabeza con un asombro de dignidad.

Las elecciones presidenciales en El Salvador,

cuyos resultados exigieron la celebración de una segunda ronda entre los dos partidos mayoritarios, fueron el foco central de atención durante *el mes de marzo*. En el ambiente internacional, a su vez, el minado de los puertos nicaragüenses con todas sus consecuencias, y el derrocamiento del general Alvarez y sus más altos jefes en Honduras, sacudieron la opinión pública.

A medida que avanzaba la campaña electoral, las excitativas del CCE, de los partidos políticos y de todas las fuerzas sociales que tenían acceso a los medios de comunicación, eran cada vez más insistentes en que la población debía votar masivamente. Los pactos, solidaridades y respaldos se acentuaban: ARENA y el capital, la UPD firmó el "pacto social" con el PDC, el PCN y FENASTRAS pidieron no se votara por ARENA ni por el PDC y que los partidos pequeños deberían retirarse en aras del patriotismo, la CEDES (Conferencia Episcopal de El Salvador) publicó un comunicado en el cual tomó cierta distancia de las elecciones porque éstas pudieran ser una nueva frustración para el pueblo e insistió en el diálogo, y algo similar hizo Mons. Rivera poniendo mayor énfasis en el diálogo y la mediación que pudiera prestar la iglesia.

La violencia política se encendió cada vez más de palabra (por las mutuas acusaciones, insultos, falsificaciones —especialmente por la presentación ante las cámaras de TV de un tal Lovo, supuesto cómplice en el asesinato de Mons. Romero, desenmascarado por el PDC como un impostor y delincuente), e incluso en asesinatos políticos, entre los que sobresalieron los de los coroneles Montenegro y Tito Adalberto Rosa, no suficientemente aclarados ni en sus motivaciones ni en sus victimarios, o el del Dr. Rafael Hasbún, cuya muerte quedó bajo fuertes sospechas, y la misma Policía Nacional declaró que seguiría investigando, ya que no le constaba la autenticidad de un supuesto comunicado del PRTC en el cual se atribuía el hecho.

Pero el impacto más fuerte y escandaloso fue la impugnación que el PDC hizo ante el CCE contra el candidato presidencial de ARENA, Roberto D'Aubuisson, basándose en tres argumentos, de los cuales el principal era su "inmoralidad notoria" por sus acciones, su campaña insultante y la supuesta complicidad con escuadrones de la muerte. Después de fuertes polémicas y acaloradas discusiones a todos los niveles, el CCE rechazó la impugnación y ratificó la candidatura de D'Aubuisson.

Al mismo tiempo, se anunció la presencia masiva de observadores oficiales para el día 25, no menos que la de cientos de periodistas y corresponsales de medios de comunicación. La asamblea aprobó una elevada partida para cancelar la "deuda política" a los partidos que obtuvieron más del 5 por ciento de la votación válida en 1982, así como adelantos de medio millón de colones para la presente campaña, todo ello sustraído a las diversas dependencias de la administración pública, especialmente a los ministerios de educación, agricultura y obras públicas. El CCE anunció que tenía listo el proceso y todos los implementos para la realización de la votación y el escrutinio, pero ya antes del mismo se echó de menos una campaña amplia y consistente sobre el proceso, los listados, sitios de votación, etc., e incluso en las vísperas se descubrieron fallas notables, como la inexistencia de locales asignados para depositar los votos, o la extrema complejidad de todo el evento frente a la escasa información y a la inexperiencia generalizada.

El día 25 de marzo el pueblo se volcó a las calles masivamente, pese a la cada vez más evidente organización insuficiente, pese al apagón eléctrico provocado desde la noche anterior por sabotajes de la guerrilla, pese a la ausencia casi absoluta de transporte público, pese a la tardanza —e incluso desaparición en algunos casos— de los integrantes de las mesas receptoras o la confusión de listados y de instrumentos de votación o la carencia de algunos de éstos por los sucesos de la noche anterior, el temor de algunos representantes oficiales, o tal vez la intencionada irresponsabilidad de otros. Todo ello condujo al congestionamiento en los lugares de votación, a la movilización forzada de los votantes de uno a otro lugar, o a la imposibilidad de emitir el voto para un número considerable, que en un principio se dijo habría llegado al medio millón, cifra demasiado abultada. Sin embargo, el mismo CCE reconoció que las urnas y papeletas de 800 mesas se habían extraviado y pidió a la fiscalía su búsqueda y sanciones pertinentes; anuló los resultados de 760 urnas, y reconoció que en 58 municipios no se había podido votar (contra los 91 que afirmó la guerrilla). En la noche misma del 25, el embajador norteamericano apareció ante la TV alabando el proceso y dando declaraciones positivas, así como un congresista del mismo país; sin embargo, momentos más tarde el CCE trató de justificar su actuación frente al acoso de los periodistas y a las acusaciones de gran desorden, así como la renuncia del director del sistema

de computación, reconociendo las limitaciones y la inexperiencia, pero reivindicando la honestidad del organismo y la voluntad de impedir el fraude por encima de todo. Por su parte, el gobierno norteamericano, a su más alto nivel, los observadores internacionales más vinculados con el mismo, y distintas fuerzas sociales y políticas, remarcaban el significado democrático de las elecciones, la voluntad popular de rechazar la violencia, la "fiesta cívica" demostrada en ese día, sin reparar en los obstáculos; en cambio, los medios de comunicación internacionales cada día resaltaron más los desórdenes y percances ocurridos, sobre el hecho mismo de lo masivo del sufragio.

El tedioso conteo y revisión de las urnas y votos, fiscalizado por los partidos, terminó muy pronto dados los mecanismos, arrojando un resultado del 43.41 por ciento a favor del PDC, el 29.76 por ciento para ARENA, y el 19.31 por ciento para el PCN, mientras que los demás partidos no alcanzaron cifras significativas, especialmente PAISA (1.21%), lo cual mostró la carencia de base social y la polarización del electorado tras el tipo de campaña desarrollada. Si se suman los imposibilitados de votar, los lugares controlados por la guerrilla, los votos nulos, etc., más de la mitad de los posibles votantes no depositaron su voto por distintas razones, o no les fueron computados. Como conclusión del 25 de marzo, ningún partido obtuvo la mayoría y se tuvo que ir a una segunda votación popular entre el PDC y ARENA en el plazo de un mes a partir de la consolidación de los resultados.

Las reacciones frente al suceso y a sus resultados fueron acordes con los intereses de cada grupo. La administración Reagan y los altos personeros norteamericanos insistieron en el valor democrático, lo cual justificó más ayuda a El Salvador; el presidente Magaña resaltó el valor del pueblo a pesar de las dificultades, y algo similar sostuvo el alto mando militar, aunque lamentó los costos bélicos y muertes en el ejército, así como el que se hubiese menospreciado al pueblo votante a quien se trató casi como a una pelota de trapo. La Iglesia católica alabó el comportamiento, pero mostró las limitaciones del proceso; al tiempo que insistió (Mons. Rivera) en el diálogo y la negociación, se pronunció contra la ayuda militar norteamericana y recordó la exigencia de juzgar a los asesinos de las monjas (pocos días antes había renunciado el defensor de los mismos por complicaciones poco claras, y también en

esos días se había declarado inocente, en la nocturnidad, al mayor Roeder acusado de secuestros y extorsiones con implicaciones en hecho de sangre, lo cual mostró la poca disposición a aplicar la justicia). Los partidos políticos trataron de capitalizar los resultados a su favor, lo mismo que las distintas fuerzas sociales. Por el contrario, el MPSC denunció la "mascarada electoral" y ratificó que sólo una negociación podría aportar una verdadera solución; el FDR-FMLN acusó al proceso de ser algo impuesto y manipulado por Estados Unidos, una muestra más de la intervención creciente de esa potencia en el país, y anunció que seguirían con sus proyectos y estrategias políticas, por lo tanto, la guerra continuará por más elecciones y vueltas que se realicen. También aclararon que no habían atacado militarmente de manera especial las elecciones, sólo respondieron a las provocaciones del ejército salvadoreño.

En el ambiente internacional lo más destacable en el mes fue la denuncia y el escándalo provocado por el minado de los puertos nicaragüenses, a consecuencia de lo cual ya en la primera quincena del mes habían sido dañados 15 barcos de distintas banderas. Los grupos armados opositores al gobierno sandinista se atribuyeron los hechos, pero poco a poco se fue descubriendo que había sido con apoyo norteamericano, principalmente a través de la CIA, desde un barco nodriza en aguas internacionales, cosa que la administración norteamericana no aceptó públicamente, pero tampoco lo negó contundentemente. Esto no es más que un paso más en el cerco de amenazas y hostigamientos que Estados Unidos ha montado contra el sandinismo al cual, definitivamente, quiere no sólo desestabilizar sino derrocar. Por eso este gobierno ve cada vez más inminente el peligro de invasión armada y ha pedido ayuda internacional al tiempo que ha exhortado a sus ciudadanos a prepararse para la guerra. Las programadas elecciones en Nicaragua ya no son aceptadas como válidas, alegando que votarán los soldados, los jóvenes desde los 16 años, y el rechazo a la fiscalización de observadores extranjeros. Mientras que con la vecina Costa Rica, base de ARDE, han empeorado las relaciones por acciones militares cerca de la frontera. Este último país decidió armarse, aunque no militarizarse, con la ayuda norteamericana. Aviones espías fueron enviados a Palmerola, Honduras, para vigilar permanentemente el espacio aéreo salvadoreño, Reagan presionó por

más ayuda a los "contras," mientras éstos, y el ejército hondureño en menor escala, atacaron en la frontera sur-oriental a Nicaragua. En Honduras se montó una campaña de amenaza de guerra y el embajador Negroponte solicitó más ayuda para Honduras y los "contras." La Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos se pronunció contra la política norteamericana hacia Centroamérica y contra las elecciones en El Salvador, el ex-embajador Stone propugnó por las negociaciones en el área. El Congreso, sin embargo, no estuvo de acuerdo con la línea de la Casa Blanca, pero ésta preparó nuevos operativos militares conjuntos en Honduras, presionó por mayor asistencia militar a El Salvador y a los "contras," e intentó obtenerla camuflada con una partida de alimentos para el África, lo que suscitó la indignación de senadores y congresistas.

Pero la aparente consistencia de la institución armada hondureña se resquebrajó cuando en la mañana del último día de marzo un grupo de oficiales jóvenes apresó, esposó y deportó al general Alvarez y a cuatro generales más, estrechamente vinculados a él, pasando a ocupar su cargo el jefe de la aviación, general Walter López, sobrino del dictador López Arellano. El presidente Suazo Córdova trató de capitalizar los hechos a su favor, mostrando su autoridad como presidente y comandante general de la institución armada, pero la realidad es que en el evento se demostró también que el poder civil no pinta mucho en ese país, sino que los militares hacen y deshacen a su gusto y conveniencia, con la bendición o anuencia norteamericana, sin la cual de ningún modo se podría haber llevado a cabo. Los planes militares han continuado sin titubeos de ningún tipo con los nuevos hombres de mando, pero con la misma estructura de poder. En cambio, el jefe de gobierno de Guatemala nuevamente se ha distanciado de los norteamericanos, declinando su participación en los operativos conjuntos y mostrando sus dudas en cuanto a la eficacia y conveniencia de reavivar el CONDECA.

En lo que a la guerra y represión se refiere, como indicara públicamente el FDR-FMLN, las elecciones no modificaron la situación, las acciones han seguido al ritmo normal (relativamente bajo en estos meses). Tales acciones "rutinarias" fueron capitalizadas por Estados Unidos y la Fuerza Armada como falta de palabra de la guerrilla y prueba de su actitud mentirosa y anti-

democrática. Durante el mes el FMLN realizó más de cien acciones, 68 de ellas de sabotaje, principalmente a la electricidad; fuertes emboscadas con muchas bajas del ejército en Tecoluca, Suchitoto, Tejutepeque y Ciudad Barrios, toma de varias poblaciones del oriente del país, ataques a otras muchas en distintos departamentos centrales y orientales, sobresaliendo el ataque a la guarnición de Texistepeque (norte del occidental departamento de Santa Ana) con un saldo de 20-30 bajas de la F.A., hostigamientos a otras y al cuartel de San Miguel, tomas de carreteras, sustracción de unas 30.000 cédulas para impedir votación en esa zona oriental, incendios de gasolineras, alcaldías y otras oficinas gubernamentales; en vísperas del 25 un avión de la fuerza aérea que llevaba urnas y papeletas fue destruido al chocar el tren de aterrizaje con minas colocadas en la pista de San Rafael Obrajuelo (San Miguel); el mismo día de las elecciones se tomaron varias poblaciones, y en otras (Santa Rita y Dulce Nombre de María - Chalatenango -, y Puerto El Triunfo - Usulután) se robaron las urnas y las papeletas. Como consecuencia, la institución armada sufrió 123 muertes en el mes (1 teniente, 4 subtenientes, 3 subsargentos, 4 cabos, 98 soldados, 6 efectivos militares y 7 miembros de cuerpos de seguridad o de la defensa civil) a los que hay que agregar cuando menos 10 heridos y 22 bajas, para un total mínimo de 155 "bajas." Por su parte, el MOR se atribuyó el asesinato del coronel retirado Tito A. Rosa y del diputado por el PCN Héctor Tulio Flores. En el enfrentamiento cerca de Suchitoto perdió la vida, aparentemente en fuego cruzado, el fotógrafo norteamericano del *Newsweek*, John Hoagland.

La Fuerza Armada realizó varios operativos en el mes, uno de ellos incluido en la prolongada operación "Bienestar para Usulután," en la cual tomaron Jucuarán y San Agustín, causando la muerte de muchos miembros del FMLN y la destrucción de numerosos campamentos, según el COPREFA; otros dos grandes operativos montaría en los departamentos de San Miguel y Chalatenango, sin mayores datos, aunque el COPREFA afirmó que en el ataque al cuartel de San Miguel murieron 30 guerrilleros, y otros 14 en Usulután, a manos del batallón Ponce; el uso intensivo y más certero de la aviación confirmó el apoyo de los aviones espías. Los escuadrones de la muerte volvieron a cobrar más vidas. El CAS amenazó a los periodistas, cosa que provocó la

condena y enojo del embajador Pickering; ese mismo CAS ametralló la agencia publicitaria de Munés (PDC), acusándolo de desinformación y traición a la patria. Como resultado de todo ello, en el mes de marzo fueron capturadas al menos 43 personas (15 de ellas desaparecidas), contra sólo 4 de parte de la guerrilla; también se informó de la muerte de 407 civiles (45 por escuadrones, 327 por el ejército, 33 por la fuerza aérea y el ejército), de los cuales 90 perecieron en enfrentamientos, 269 en operativos militares, cinco fueron sacados de sus casas, y se tiene noticia de 20 casos en que hubo muertos civiles víctimas de acciones militares, pero sin conocerse aún el número exacto en cada uno de ellos; de parte del FMLN se conoce de la muerte de 7 civiles.

Por lo que respecta a la situación económica del país, por más que los altos personeros de las finanzas tratan de justificar la situación y crear cierta confianza, defendiendo la estabilidad del colón, afirmando que la situación es menos mala que en años anteriores, que se dispone de divisas para importar, la realidad parece menos optimista. No hay aceite en el mercado y el poco que se encuentra está a precios astronómicos, pues los fabricantes quieren mejores precios. No hay medicinas en el hospital Rosales y menos en el interior del país. Se ha desatado una serie de paros laborales en la banca y entidades públicas, demandando un módico aumento de salarios, lo cual ha motivado la protesta de la derecha y de ARENA (que controla tales organismos), acusándolos de colaboracionismo con la izquierda, infiltración, maniobra del pacto social firmado por PDC-UPD, mientras el COPREFA acusa a FENASTRAS (que presentó una plataforma reivindicativa) y a MUSYGES de ser parte del FDR-FMLN, cosa que esta entidad síndico-gremial negó al tiempo que expuso la grave situación económica de los trabajadores ante el alza del costo de la vida y la congelación de los salarios. Pero los algodoneros y cafetaleros presionaron y amenazaron si no se les concedían privilegios especiales, hasta que lograron que el valor de sus exportaciones les sean cambiadas en el mercado paralelo; también consiguieron otras ventajas. Por otro lado, las elecciones, en esta crisis del país, han supuesto sumas considerables de dinero, de las que Estados Unidos proporcionó diez millones de dólares (según el *Miami Herald*, 25-3-84), además del casi otro millón de dólares presupuestado por el gobierno salvadoreño; a lo cual hay que añadir los refuerzos presupuestarios y los costos

del pago de la "deuda política" tanto de las elecciones de 1982 como de las de marzo de 1984; y eso sin contar lo que exigirá la segunda ronda electoral.

El mes de marzo, por consiguiente, muestra alguna novedad y ruptura en la monotonía política y bélica de El Salvador y Centroamérica. Las elecciones concentraron la atención, la publicidad, los esfuerzos y los sacrificios económicos, para costear esa "fiesta cívica," que ciertamente tuvo alguna importancia, pero que no resolvió los graves problemas del país. La intensificación de la guerra, ya sea en El Salvador, ya sea por el acoso progresivo a Nicaragua, evidencia nuevamente que la solución buscada por Estados Unidos no es la vía pacífica, ni el juego democrático, sino el quitar violentamente todos los obstáculos que se oponen a sus intereses en la región.

La campaña electoral para la segunda ronda, entre los dos partidos que obtuvieron mayor número de votos el 25 de marzo (PDC y ARENA), polarizó la atención durante *el mes de abril*, sobre todo por la saturación de los medios de comunicación y por una serie de acontecimientos que fueron indicando la cerrada lucha por el poder librada el 6 de mayo.

Primero se rumoreó la posibilidad de coaliciones de partidos de derecha contra la DC, e incluso se especuló con la renuncia de D'Aubuisson para presentar a Francisco José Guerrero (PCN) como candidato presidencial por el nuevo bloque. Un diputado del PPS en la asamblea primero sugirió tímidamente la modificación a la Ley Electoral Transitoria, en el sentido de poder cambiar candidatos y constituir coaliciones para la segunda ronda. Días más tarde, el bloque ARENA-PAISA-PCN-PPS logró una apretada victoria (31 votos de 60) por la cual se modificó la ley electoral, principalmente en la eliminación de listados de votantes para la segunda ronda, lo cual propiciaría mayores facilidades al partido contendiente de ultraderecha para obtener una mayoría que de otro modo era casi imposible de alcanzar. El PDC y AD se retiraron de la sesión en señal de repudio a la maniobra, protestando enérgicamente contra la violación constitucional, legal y política, y pronosticando la decisión como una puerta abierta al fraude y la coacción para que ARENA ganara unas elecciones que lógicamente darían la victoria al PDC.

Por su parte, el CCE se pronunció indignado contra la medida legislativa, alegando su

autonomía en el proceso, el desperdicio de recursos utilizados en la preparación del mismo, el esfuerzo por corregir los defectos del 25 de marzo, la probabilidad de irregularidades con el nuevo sistema, entre otras cosas, por lo tanto planteó el que si el presidente Magaña no vetaba la resolución legislativa, renunciaría en pleno en señal de protesta y para no ser cómplice de las irregularidades electorales que se siguieran. Los distintos partidos minoritarios y las fuerzas sociales vinculadas con los dos contendientes, intensificaron su campaña de protesta o de apoyo. Por último, el presidente Magaña vetó la resolución de la asamblea, dejando en pie los mecanismos aprobados e implementados por el CCE. Esto dio paso a una serie de acusaciones de la ultraderecha, la cual dijo que el presidente había actuado bajo presión norteamericana. Al mismo tiempo, el CCE comunicó que ya se habían corregido las principales anomalías de la primera ronda, que ya se disponía de los fondos necesarios para la segunda y que todo estaría listo antes de la fecha prevista a fin de eliminar complicaciones y dar mayores facilidades al votante. Habría menos observadores internacionales que en la primera ronda, debido principalmente a la premura de tiempo, a la proximidad entre ambas rondas y a la escasez de recursos. Mientras tanto, la campaña política iba subiendo de tono hasta niveles insospechados, ya fuera en insultos, amenazas, (atentados vinculados con la política), o promesas risibles e irrealizables; incluso salió a luz un supuesto comando que amenazó a diplomáticos, políticos y un sin fin de personajes que fueran en carros con vidrios polarizados, como para infundir temor, echar una cortina de humo, o tal vez incluso como una broma o acto de humor negro de algún desaprensivo. Mons. Rivera denunció en su homilía dominical el tipo de campaña y demás mecanismos de presión, coacción e intimidación, así como la degradación de las normas elementales de comportamiento cívico-político. Para terminar de completar el cuadro electoral, la asamblea, con la mayor naturalidad y rutina, renovó por otro mes el estado de sitio, para completar ya los cuatro años ininterrumpidos, sin parar mientes en la limitación de libertades para unas elecciones que se decían democráticas.

Por su parte, el alto mando de la Fuerza Armada y los principales comandantes militares, reunidos para analizar la situación y el futuro del país, parece ser que escribieron un documento dirigido al futuro presidente de la república, en el

cual le circunscribían sus poderes en el campo castrense y le retiraban de toda decisión y responsabilidad que les afectara. Por supuesto, oficialmente se negó la existencia de dicho documento, pero las fuentes informativas presentaron evidencias que ponían en duda la postura oficial. Un alto oficial, a su vez, propuso que el servicio militar fuera de hecho obligatorio para todos los ciudadanos, y no sólo para la población más pobre, como lo ha sido hasta el presente, por razón de justicia y de patriotismo; quizás también por necesidad de ampliar las bases del ejército, como se insinuó por los masivos reclutamientos que se estaban llevando a cabo en todo el país.

En fin, a nivel diplomático, el gobierno salvadoreño decidió trasladar su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalem, postura que defendió el presidente Magaña, ante el mutismo de la cancillería, y que provocó vehementes protestas de Egipto que retiró su delegación y rompió relaciones.

En el aspecto económico y laboral, el mes de abril presenció una nueva batalla de los cultivadores de algodón, que exigieron mejores precios de garantía para su producto de parte del gobierno, o de lo contrario no sembrarían este año. La agrupación sindical MUSYGES, por su parte, refutó severamente las acusaciones formuladas por el COPREFA, negando que fuera una organización política, que constituyera parte del FDR-FMLN, y afirmando su carácter gremial, al tiempo que convocó a una manifestación para conmemorar el primero de mayo. Al mismo tiempo, el gobierno, a través del Consejo Nacional del Salario Mínimo, decretó una nueva tabla de salarios a partir del primero de mayo, con aumentos escasamente superiores al 10 por ciento, insuficientes para contrarrestar el alza del costo de la vida.

En el campo de batalla las acciones en el mes de abril mantuvieron un nivel relativamente bajo. La Fuerza Armada realizó distintos operativos —o continuó con los iniciados con anterioridad—, entre los cuales sobresalen bombardeos de artillería y aviación durante cuatro o más días seguidos en la zona de Suchitoto y volcán de Guazapa, en San Sebastián y otros pueblos de San Vicente, fuertes combates en Jocoro y Divisadero (Morazán), un gran operativo con tres batallones en los límites departamentales de Chalatenango y Santa Ana. En la zona de Guazapa fueron denunciados actos masivos y continuos de arrasamiento, destrucción y represión, con múl-

tiples masacres de la población civil, incluidos numerosos niños. Los vuelos de los aviones espías norteamericanos con base en Honduras le han estado proporcionando información a la fuerza aérea salvadoreña, la cual ha conducido con mayor efectividad y puntería sus bombardeos y el consiguiente daño a la población civil y a la guerrilla. Según el COPREFA, las bajas del FMLN en abril se elevarían a 122 muertos, 68 heridos y otras 190 bajas, para un total de 380 "bajas." En cuanto a la población civil, hubo 109 personas capturadas en el mes (frente a dos por la guerrilla), y 229 muertos (frente a 3 por la guerrilla), 129 de ellos en enfrentamientos, 47 en operativos militares, 7 sacados de sus casas y 3 dinamitados (se atribuyen 34 a escuadrones, 181 al ejército y 14 a la defensa civil); pero se han denunciado 16 casos de acciones militares con muertos civiles, si bien al momento no se tenían datos exactos de las víctimas.

Por parte del FMLN se produjeron por lo menos 23 acciones de sabotaje, en su mayoría a la energía eléctrica, 10 tomas de emisoras para difundir mensajes, 9 acciones estrictamente militares, de las cuales las principales fueron el ataque y destrucción de oficinas y guarniciones en Santa Cruz Michapa (Cuscatlán), así como el ataque, destrucción y saqueo a un tren cerca de Villa El Tránsito (San Miguel). Como consecuencia, la Fuerza Armada tuvo 96 muertos a manos de la guerrilla (1 mayor, 1 teniente, 3 subtenientes, 3 sargentos, 7 cabos, 66 soldados, 5 patrulleros, 6 guardias nacionales, un policía de hacienda, un policía nacional y 2 motoristas), si bien radio Habana habló de 357 "bajas" a la Fuerza Armada en el mes. Un caso que permaneció en la penumbra fue la muerte violenta del jefe de seguridad de la embajada norteamericana (salvadoreño), que en primera instancia se atribuyó a la guerrilla, pero la misma Policía Nacional no le dio suficiente credibilidad y se rumoreó que pudiera ser consecuencia del asesinato del Dr. Hasbún, cuya pista andaba siguiendo y pudiera haber llegado a conocimientos no permisibles para determinados intereses implicados.

En el plano internacional lo que más resalta es la postura abierta y descarada de la administración Reagan en su opción militarista en el área. Se comprobó la participación norteamericana y de la CIA en el minado de puertos nicaragüenses, lo cual provocó una ola de protestas e indignación a todos los niveles. Nicaragua protestó y llevó el caso al Consejo de Seguridad de la

ONU, donde Estados Unidos utilizó su poder de veto; lo llevó al tribunal de La Haya, pero Reagan declaró que por dos años no aceptaría las decisiones del mismo para Centroamérica. La reacción mundial fue de indignación, incluida la Sra. Thatcher. Al interior de Estados Unidos también creció la indignación, hasta el punto de que el Senado, que acababa de aprobar una nueva ayuda para los "contras," se pronunció masivamente contra el minado de puertos y las acciones inconsultas de la CIA y de la administración.

Mientras tanto, se adelantaron las operaciones militares en Honduras ("Granadero I"), con participación de 1.300 soldados salvadoreños; se inició un operativo naval conjunto de Estados Unidos, Honduras y El Salvador en el Golfo de Fonseca ("Guardianes del Golfo") el cual durará hasta el día siguiente a la segunda ronda electoral del 6 de mayo. Si insistió una y otra vez, contra toda evidencia y verdad, que todo ello iba dirigido a impedir la ayuda militar de Nicaragua a la guerrilla salvadoreña. Se suspendió la visa a Ungo para entrar en Estados Unidos. En el campo diplomático se logró una reunión de cancilleres de Honduras, Costa Rica y El Salvador, para presentar propuestas alternativas a Contadora, que sigue clamando en el desierto, con apoyo verbal norteamericano, pero sin respaldo efectivo, más bien con oposición velada. Honduras insiste en la reubicación de los refugiados salvadoreños en el interior del país, por ser una amenaza para la paz y apoyo a la guerrilla, sobre todo después de que dos helicópteros militares norteamericanos, que llevaban a dos senadores por la zona fronteriza, fueron ametrallados por el FMLN y tuvieron que verificar un aterrizaje de emergencia en suelo hondureño, sin que afortunadamente se produjeran víctimas.

El mes de abril, por consiguiente, presencié una mayor polarización: en la vida política interna salvadoreña, en torno a la segunda ronda de elecciones y a la radicalización verbal de las dos posiciones en contienda y de los grupos de apoyo; en el campo internacional, en torno a las acciones militaristas norteamericanas y a su obstinación frente a toda racionalidad y comportamiento aceptable. Todo ello ayuda a esclarecer qué es lo que verdaderamente se pretende conseguir en el área, a costa de lo que sea necesario para lograrlo.

Eugenio C. Anaya, h.